



Consejo de
Transparencia y
Buen Gobierno

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN

N/REF: RT 0339/2017

FECHA: 04 de diciembre de 2017

ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

En respuesta a la Reclamación número RT/0339/2017 presentada por [REDACTED], [REDACTED] y representante del Sindicato SGTEX, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente **RESOLUCIÓN:**

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos que han dado lugar a la presente Reclamación pueden sistematizarse como sigue.

a) Mediante escrito del ahora reclamante registrado en la Junta de Extremadura el 10 de mayo de 2017 y dirigido a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Ordenación del Territorio formula, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno -desde ahora, LTAIBG- la siguiente solicitud de acceso a la información:

- Se remita el listado de los vehículos asignados a los Agentes del Medio Natural y su fecha de matriculación.
- Se informe sobre la situación general de los vehículos asignados a los Agentes del Medio Natural:
 - Fecha última ITV, e incidencias detectadas en ésta.
 - Números de conductores y turnos.
 - Trabajos de mantenimiento en los últimos dos años.

ctbg@consejodetransparencia.es



- Tipo y número de averías en los últimos dos años
- Accidentes de tráfico que haya sufrido en los últimos dos años.

- Se informe sobre la existencia o no de indicativos luminosos y sonoros (tipo V1) en los coches, dado que se realizan funciones como vehículos prioritarios (asistencia a incendios forestales). Y en caso de existir, características de los mismos.

- Dado que estos trabajadores y las situaciones de elevado riesgo a las que podrían enfrentarse. Se solicita se informe si existe un Plan de renovación de la flota de vehículos, para que en ningún caso se superen los 10 años de antigüedad.

- Se remita listado de todos los vehículos asignados en propiedad, renting o cualquier otro régimen de tenencia, a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, dependencia de localización, su fecha de matriculación y kilometraje a fecha 1 de mayo de 2017.

- Se remita listado de todos los vehículos asignados en propiedad, renting o cualquier otro régimen de tenencia a la empresa pública Sociedad de gestión Pública de Extremadura SAU (GPEX) que desempeñan encomiendas de gestión para la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, dependencia de localización, su fecha de matriculación y kilometraje a fecha 1 de mayo de 2017.

b) Con posterioridad, a través de un escrito registrado en la Junta de Extremadura el 10 de julio de 2017, el interesado, al no haber obtenido contestación a su originaria solicitud de acceso a la información, interpone una reclamación al amparo del artículo 24 de la LTAIBG.

c) Mediante Resolución del Secretario General de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de 31 de julio de 2017, y fecha de registro de salida el siguiente 4 de agosto, se resuelve inadmitir la solicitud de 10 de mayo por considerar de aplicación la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.e) de la LTAIBG, esto es, por tener un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de la LTAIBG.

En concreto, en el Fundamento Jurídico Segundo de dicha Resolución, tras reproducir parte del Criterio Interpretativo CI/003/2016 de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, se indica que «considerando que la finalidad de la LTAPBG y de la LGAE es la de proporcionar a la ciudadanía una fuente de información que le ayude a formarse una opinión sobre la acción de los responsables públicos en cuanto a la toma de decisiones, manejo de los fondos públicos y criterios de actuación de las instituciones públicas y, no siendo posible, a juicio de esta Secretaria General, determinar en qué sentido la información solicitada puede ayudar a tales fines, se estima que la presente petición tienen carácter abusivo ya que no puede ser reconducida a ninguna de



las finalidades señaladas en el Criterio Interpretativo CI/003/2016 de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos».

Asimismo, a mayor abundamiento, considera que la solicitud «igualmente supone un ejercicio abusivo del derecho a la información pública ya que desde el punto de vista cualitativo la información solicitada requiere paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar dicha información impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tiene encomendado». A estos efectos, continúa su argumentación la Resolución, «la simple comprobación del número y contenido de solicitudes presentadas en los últimos meses por el Sindicato SGTEx ponen de relieve lo aquí manifestado», enumerando un listado de nueve solicitudes de acceso a la información sobre diferentes ámbitos materiales realizadas el 3 de mayo de 2012, el 25 de enero, 20 y 25 de abril de 2016 y el 23 de enero, 14 de febrero, 21 de marzo, 26 y 27 de abril de 2017.

d) Frente a esta Resolución, por escrito registrado en esta Institución el 28 de agosto 2017, el interesado interpone una reclamación al amparo del artículo 24 de la LTAIBG. Entre otras consideraciones, por una parte, entiende que la contestación de varias de las cuestiones planteadas no pueden entenderse en ningún momento que paralizaría el funcionamiento de la administración; por otra parte, considera que la LTAIBG no limita el ejercicio del derecho de acceso a la información a presentar un número máximo de solicitudes; asimismo, pone de manifiesto que la reclamación presentada mediante escrito de 10 de julio de 2017 no ha sido tenido en cuenta en la resolución del secretario general de 4 de agosto de 2017-, y, finalmente, que en la sede electrónica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se encuentra publicada información y datos sobre vehículos como siniestralidad, reparaciones (en talleres internos o externos), tiempo medio de vehículos en reparación, kilometrajes, etc., concluyendo que en ningún caso puede entenderse su solicitud como abusiva.

Examinado el escrito de interposición de la reclamación, por oficio de la Oficina de Reclamaciones de las Administraciones Territoriales de este Consejo notificado el 1 de septiembre de 2017 se requiere al ahora reclamante para que, de acuerdo con el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de diez días hábiles subsane la falta de documentación observada, dado que no se acompañaba la resolución de 31 de julio de 2017 del Secretario General de la Consejería de medio Ambiente y Rural Políticas Agrarias y territorio y fecha de registro de salida de 4 de agosto.

A través de un escrito registrado el 5 de septiembre de 2017, el hoy reclamante traslada copia de la documentación requerida, comenzando la tramitación de la reclamación, según prescribe el artículo 24 de la LTAIBG.

2. El 5 de septiembre de 2017, por la Oficina de Reclamaciones de las Administraciones Territoriales de este Consejo, se dio traslado del expediente de



referencia al Secretario General de Administración Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública a fin de que, en el plazo de quince días hábiles, por el órgano competente, se formularan las alegaciones que se estimasen convenientes, aportando, asimismo, toda la documentación en la que fundamentar las alegaciones que pudieran realizarse.

Mediante escrito de la indicada Secretaria General registrado en esta Institución el 10 de octubre de 2017 se traslada escrito de alegaciones que reproduce de manera literal el contenido del Fundamento de Derecho Segundo de la resolución del secretario General de 31 de julio de 2017 ahora recurrida.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con su artículo 38.2.c) y el artículo 8.2.d) del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de este organismo es competente para resolver, con carácter potestativo y previo a un eventual recurso contencioso-administrativo, las reclamaciones que se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información.
2. A tenor del artículo 24.6 de la LTAIBG, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene competencia para conocer de las reclamaciones que regula dicho precepto *“salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley”*. Tal disposición prevé en sus apartados 1 y 2 lo siguiente:

“1. La resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. (...).

2. Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias”.

En desarrollo de los preceptos reseñados el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Junta de Extremadura (Consejería de Hacienda y Administración Pública) han suscrito un Convenio para el traslado a este Consejo del ejercicio de



la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el citado artículo 24 LTAIBG en los supuestos de resoluciones dictadas por aquella Administración Autonómica y por las Entidades Locales incluidas en su ámbito territorial, así como por los entes, organismos y entidades integrados en el sector público autonómico o local.

3. Con carácter preliminar este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno considera conveniente formular alguna consideración sobre la Reclamación planteada por el hoy recurrente mediante escrito de 10 de julio de 2017. En efecto, según se desprende de la documentación obrante en el expediente, al no haber obtenido contestación a su originaria solicitud de acceso a la información el interesado presentó, a través del registro único de la Junta de Extremadura, una reclamación al amparo del artículo 24 de la LTAIBG al considerarla desestimada por silencio administrativo. No obstante, examinados los archivos y el registro de entrada del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, no consta la recepción y entrada de dicho escrito en las dependencias de esta Institución.

De este modo, hemos de atenernos en el supuesto que ahora nos ocupa a considerar que el acto expreso de la administración autonómica frente al que se interpone reclamación al amparo del artículo 24 de la LTAIBG por el hoy recurrente, mediante escrito registrado el 5 de septiembre de 2017 en este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, es la Resolución de 31 de julio de 2017 por la que se inadmite la originaria solicitud de acceso a la información por incurrir en la causa prevista en el artículo 18.1.e) de la LTAIBG.

4. Tal y como se ha precisado por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con ocasión de reclamaciones planteadas por Comités de Empresa -por todas, puede verse el Fundamento de Jurídico 3 de la Reclamación con número de referencia R/0462/2016-, antes de entrar en el fondo del asunto planteado en la presente Reclamación, resulta conveniente formular algunas consideraciones sobre el marco en el cual se ha solicitado la información y, derivado de ello, la normativa jurídica aplicable.

Como se desprende de los antecedentes de hecho y de la documentación obrante en el expediente, la solicitud de información se enmarca dentro de las relaciones laborales mantenidas entre los representantes de los trabajadores. Se trata, por lo tanto, de un ámbito que, por un lado, obliga a proporcionar información por parte de los responsables de la entidad y, por otro, y con base precisamente en la información obtenida, permite proteger los derechos de los trabajadores por parte de los representantes de los mismos.

En el caso que nos ocupa, como en otros de los que ha tenido conocimiento este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el medio de impugnación previsto en la LTAIBG, esto es, la presentación de una reclamación ante esta Institución, ha sido utilizado cuando la respuesta o ausencia de ella que se reclama se ha presentado en el marco de las relaciones laborales que antes indicábamos. En relación a lo anterior, no obstante, no debe dejarse de lado el acceso a la



información regulado por la LTAIBG, configurado como un derecho de amplio ámbito objetivo y subjetivo y, especialmente, el concepto de información pública y, por lo tanto el posible objeto de una solicitud de información que la ley consagra como: todo contenido o documento que obre en poder de un organismo sujeto a la norma que haya sido obtenido o elaborado en el ejercicio de sus funciones.

Este hecho -entender que puede ser objeto de una solicitud de información cualquier información que posea el organismo o entidad al que se dirija la misma- así como que no sea necesario motivar la solicitud, por lo que no está vinculada a la titularidad de un interés por parte del solicitante, hace difícil cuando no imposible, sustraer del marco de la LTAIBG una solicitud de información que cumpla las condiciones indicadas en la misma.

Sin embargo, este Consejo de Transparencia también quiere recordar que el objetivo final de la LTAIBG es el escrutinio de la acción pública, y ello mediante el conocimiento del proceso de toma de decisiones como medio de rendición de cuentas de los responsables públicos. Y desde esa perspectiva deben ser analizadas, a nuestro juicio, las solicitudes de acceso a la información que tengan su amparo en la misma. Por ello se recuerda que el conocimiento de información en el marco de las relaciones laborales debe ampararse, preferentemente, en el régimen contenido tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en el Estatuto Básico del Empleado Público en caso de que sea de aplicación.

5. La administración autonómica ha invocado para inadmitir la solicitud de acceso a la información planteada por el hoy recurrente que concurre el supuesto previsto en el artículo 18.1.e) de la LTAIBG esto es, que se trata de una solicitud de acceso a la información abusiva, por cuanto, de una parte, no puede reconducirse a ninguna de las finalidades de la Ley Transparencia de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos y, de otra parte, ese carácter abusivo se reflejaría en las solicitudes de acceso a la información presentadas con anterioridad a la que ha dado origen a la presente Reclamación.

Planteada en estos términos la controversia, como premisa debemos recordar, aún de manera sucinta, que este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha elaborado el Criterio Interpretativo CI/003/2016, de 14 de julio [disponible en el sitio web http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/criterios.html], en el que, precisamente, basa su resolución de inadmisión la administración autonómica, y que, con relación a las solicitudes de información abusivas considera que hay dos elementos esenciales para su aplicación: por una parte, que «el ejercicio del derecho sea abusivo cualitativamente, no en sentido cuantitativo: el hecho de que una misma persona presente un número determinado de solicitudes no determina necesariamente un ejercicio abusivo del derecho», y por otra parte, que «el ejercicio del derecho pueda considerarse excesivo, es decir, cuando no llegue a conjugarse con la finalidad de la Ley».

De acuerdo con esta premisa, en primer lugar, debemos descartar de plano que la presentación de nueve solicitudes de acceso a la información pueda considerarse



como el presupuesto habilitante para considerar que nos encontramos en el presente caso ante un supuesto de solicitud abusiva. Tal y como se recoge en nuestro Criterio Interpretativo CI/003/2016 el hecho de que una misma persona presente un número determinado de solicitudes no determina necesariamente un ejercicio abusivo del derecho. En este caso, además, no se puede hacer equivalente las nociones de “solicitudes voluminosas” con el de “solicitudes abusivas” en tanto y cuanto ello nos llevaría a entender desestimada cualquier solicitud de acceso a la información de cierto carácter voluminoso. Para estos supuestos, por lo demás, la propia LTAIBG ha arbitrado fórmulas para conciliar el ejercicio del derecho de acceso a la información y la potestad de autoorganización de la administración en el artículo 20.1 de la LTAIBG sobre ampliación de plazos.

6. En segundo lugar, por lo que respecta al segundo de los argumentos empleados por la administración autonómica para inadmitir la solicitud, esto es, que el ejercicio del derecho pueda considerarse excesivo, dado que no se conjuga con la finalidad de la Ley, debemos partir de la premisa, ya conocida y reiterada, que el ejercicio del derecho de acceso a la información se ha configurado por el legislador básico de transparencia, así como por el legislador autonómico de desarrollo, como un derecho de amplio espectro.

Esta configuración de amplio contenido ha sido reiterada por los Tribunales de Justicia que ya han tenido ocasión de pronunciarse en diferentes ocasiones en el sentido de que el acceso a la información debe entenderse en un sentido amplio y que las restricciones al mismo deben ser excepcionales. De este modo, a mero título de ejemplo, la Sentencia 85/2016, de 14 de junio de 2016, del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 5 tras señalar que la LTAIBG «en su Preámbulo, expresamente afirma que la misma configura de forma amplia el derecho de acceso a la información pública» sostiene que «la finalidad, principio y filosofía que impregna la reseñada Ley, es un acceso amplio a la información pública; y los límites a tal acceso han de motivarse, interpretarse y aplicarse de modo razonado, restrictivo y aquilatado».

Por su parte, la Sentencia 46/2017, de 22 de junio de 2017, del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 2 afirma que «[e]l derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido a nivel internacional como tal, debido a la naturaleza representativa de los gobiernos democráticos; es un derecho esencial para promover la transparencia de las decisiones. Además las Administraciones Públicas se financian con fondos procedentes de los contribuyentes y su misión principal consiste en servir a los ciudadanos por lo que toda la información que generan y poseen pertenece a la ciudadanía. [...] Las diferentes y numerosas menciones a este derecho coinciden en resaltar la creciente importancia que está cobrando, ya que el mismo supone una herramienta indispensable para adquirir aquellos conocimientos que permiten controlar la actuación de los gobiernos y prevenir y luchar contra la corrupción así como contrarrestar la violación de derechos. De estos preceptos se desprende que el derecho de acceso a la información debe ser destacado como un valor intrínseco al concepto de democracia».



En el caso que ahora nos ocupa, si nos atenemos al tenor literal de la solicitud de acceso a la información planteada, existe un evidente interés público en la información solicitada que se conecta, con claridad, con los objetivos y finalidades de la propia Ley de Transparencia: someter a escrutinio la acción de los responsables públicos, conocer cómo se toman las decisiones públicas, cómo se manejan los fondos públicos y, por último, bajo qué criterios actúan las instituciones públicas en un ámbito material específico de la actividad de la administración pública como es el del denominado parque móvil o parque automovilístico.

De manera que, en función de los argumentos acabados de reseñar, cabe concluir señalando que no puede apreciarse la concurrencia de la causa de inadmisión invocada en el caso que ahora nos ocupa.

7. Por lo que respecta al fondo del asunto planteado, lo cierto es que la solicitud se refiere a diferentes aspectos que tienen la consideración de “información pública” a los efectos de la LTAIBG. En este sentido, valga recordar en este momento que el artículo 12 de la LTAIBG reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública” en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución y desarrollados por dicha norma legal. Mientras que en el artículo 13 de la LTAIBG se define la “información pública” como *“los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”*.

No cabe duda alguna que la materia sobre la que se solicita el acceso a la información se trata de “información pública” a los efectos de la LTAIBG dado que en ella se cumplen los dos requisitos requeridos por el artículo 13 de dicha Ley. En primer lugar, se trata de información elaborada en el ejercicio de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma por el ordenamiento jurídico. Y, en segundo lugar, se trata de información elaborada por la administración autonómica, sujeto incluido en el ámbito de aplicación de la LTAIBG a tenor de lo dispuesto en su artículo 2.1.a).

En definitiva, de acuerdo con lo expuesto hasta ahora ha de procederse a la estimación de la Reclamación planteada.

III. RESOLUCIÓN

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede

PRIMERO: ESTIMAR la Reclamación presentada, por [REDACTED]
[REDACTED] al versar sobre información pública a los efectos de la Ley 19/2013, de 9



de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

SEGUNDO: INSTAR a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Ordenación del Territorio de la Junta de Extremadura a que en el plazo máximo de un mes proporcione al reclamante la información solicitada y no satisfecha, remitiendo a este Consejo en igual plazo copia de la información trasladada a aquél.

De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En consecuencia, contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, únicamente cabe, en caso de disconformidad, la interposición de recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid en plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1, c), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

EL PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
P. V (ARTÍCULO 10 DEL REAL DECRETO 919/2014)

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Francisco Javier Amorós Dorda